



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, once (11) de diciembre de dos mil veintitrés**

#### **23-247**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.  
Demandante: **ORLANDO JARAMILLO VELASQUEZ.**  
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E y PORVENIR S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05- **001-2021-00431-01.**  
Tema: ineficacia traslado  
Decisión: **CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, se procede a estudiar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y Porvenir S.A. dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 40** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitó el demandante, se declare que le asiste el derecho a retornar al RPM en cualquier tiempo por contar con más de 750 semanas de cotización a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, conforme a las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013 de la Corte Constitucional. En subsidio de lo anterior solicitó se declare la **INEFICACIA** de la afiliación al RAIS, considerando que ha estado afiliado a Colpensiones sin solución de continuidad. Que se ordene a Porvenir S.A. a trasladar el total de los aportes junto con los rendimientos y el bono pensional al RPM. Que se ordene a Colpensiones a recibir los valores trasladados, incorporarlos en la historia laboral y reconocer la pensión de vejez de conformidad con el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición. Que se condene Porvenir S.A. a modo de indemnización de perjuicios el retroactivo pensional causado

desde la reclamación de la pensión de vejez el 4 de mayo de 2015. Que se condene a Colpensiones o a Porvenir S.A. a pagar los intereses moratorios o en subsidio la indexación. Finalmente solicitó se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 19 de abril de 1953, por lo que cumplió 60 años el mismo día y mes del 2013.
- ✓ Que inicio su vida laboral al servicio de la Secretaria de Educación del Departamento del Quindío, desde el 20 de agosto de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1977.
- ✓ Que se vinculó a la Secretaria de Educación de Antioquia desde el 13 de septiembre de 1978 hasta el 5 de abril de 1995.
- ✓ Que laboró simultáneamente en el sector privado, afiliándose al ISS el 24 de septiembre de 1984 hasta el 30 de abril de 1999.
- ✓ Que se trasladó al RAIS a partir del 30 de abril de 1999.
- ✓ Que la AFP accionada, no le suministró una información suficiente respecto de las ventajas, desventajas y consecuencias que acarrearía el traslado de régimen pensional.
- ✓ Que al 1 de abril de 1994 contaba con más de 750 semanas de cotización y tiempo de servicios, siendo beneficiario de las sentencias de la Corte Constitucional C 1024 de 2004 y SU 130 de 2013 para solicitar el traslado de régimen en cualquier tiempo.
- ✓ Que el actor ha cotizado un total de 2178 semanas en toda su vida laboral.
- ✓ Que es beneficiario del régimen de transición al tenor del Decreto 758 de 1990, teniendo derecho a acceder a la pensión de vejez desde el año 2013, momento en el que cumplió 60 años de edad, lo anterior de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional SU 764 de 2014 y SU 057 de 2018.
- ✓ Que solicitó la pensión de vejez ante Porvenir S.A. el 4 de mayo de 2015, entidad que dio respuesta negativa el 23 de enero de 2019.
- ✓ Que solicitó ante Colpensiones la ineficacia de la afiliación, junto con las demás pretensiones de la demanda quedando agotada la reclamación administrativa.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

Colpensiones E.I.C.E, se opuso a las pretensiones que la involucraban; frente a los hechos, estimó como ciertos los relativos a la fecha de nacimiento del actor, la vinculación al RPM, el traslado de régimen pensional, y la reclamación administrativa efectuada. Frente a los demás supuestos de hecho indicó que no le constan, al resultar exógenos al conocimiento de la entidad.

Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones; y frente a los hechos, indicó que no le constan resaltando que al momento del traslado de régimen la entidad brindó información clara, precisa, veraz y suficiente de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993, en la que se expresa el funcionamiento, características y requisitos del régimen de ahorro individual con solidaridad, también mencionaron las implicaciones del traslado y los requisitos para pensionarse bajo el régimen de ahorro individual de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la misma ley, motivo por el cual, la decisión de suscribir el formulario de afiliación fue producto de una decisión libre, espontánea e informada de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la ley de 1993.

#### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.**

Mediante sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida en cualquier tiempo, en su defecto se declara la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que solicitara el accionante ORLANDO JARAMILLO VELÁSQUEZ, con CC 4.464.850, el día 30 de abril de 1999, a la AFP Colpatria S.A. hoy PORVENIR S.A., con NIT 800.144.331-3 y representada legalmente por MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ.

SEGUNDO: ORDENAR a PORVENIR S.A. trasladar en un término máximo de 30 días a COLPENSIONES, con NIT 900.336.004-7 y representada legalmente por JAIME DUSSÁN CALDERÓN, el saldo total existente en la CAI del demandante, así como los porcentajes descontados al para garantía de pensión mínima, cuotas de administración, y seguros previsionales, debidamente INDEXADOS, sumas que deberán ser DISCRIMINADAS

TERCERO: DECLARAR que ORLANDO JARAMILLO VELÁSQUEZ causó su derecho a la pensión de vejez conforme las condiciones del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición en razón de la edad, prestación que será reconocida por COLPENSIONES previa solicitud del afiliado y una vez cumplido con lo dispuesto en los dos numerales anteriores. No obstante, la determinación del IBL, cuantía y fecha de disfrute, se deja a criterio de la entidad.

CUARTO: DECLARAR probada de oficio la excepción de INEXISTENCIA DE PERJUICIOS respecto de los perjuicios reclamados, y no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, conforme la parte motiva de este proveído.

QUINTO: ABSOLVER a PORVENIR S.A. de la pretensión 4° de la demanda esto es, de los perjuicios perseguidos por el demandante.

SEXTO: CONDENAR en costas a cargo de PORVENIR S.A., a favor de ORLANDO JARAMILLO VELÁSQUEZ, se señalan agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$3.480.000).

SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas a COLPENSIONES, por lo expuesto en la parte considerativa.

OCTAVO: ORDENAR que la presente decisión sea remitida en consulta a favor de COLPENSIONES a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.”

Dentro del término concedido por la ley, la parte demandante y Porvenir S.A. interpusieron recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS.**

### **2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR.**

En primer término, resaltó que el actor acredita 654,56 semanas de cotización al 30 de junio de 1995, razón por la cual no son aplicables los postulados de la Corte Constitucional y por ende, no puede retirar al RPM en cualquier tiempo. Destacó que los tiempos laborados con la Secretaria de Educación de Antioquia, se cotizó al FOMAG, y que de conformidad con el arritadlo 179 de la Ley 100 de 1993, el sistema integral de seguridad social no se aplica a los afiliados al Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, por lo que al tratarse de un régimen exceptuado, no puede darse aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Conforme a lo anterior, la decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

Frente a la pensión de vejez, estimó que solamente se es posible realizar la declaración del derecho por cuanto al momento en que se realizó la reclamación administrativa, Colpensiones no estaba facultada para estudiar la causación de la pensión, pues el actor estaba afiliado a Porvenir, por lo que no se puede considerar el agotamiento de la reclamación administrativa para esta pretensión.

En este orden de ideas estableció que el demandante cuenta con 750 semanas de cotización al 31 de julio de 2005, por lo que es viable que su derecho se cause cuando arribo a la edad, esto es en el año 2013, momento para el cual también contaba con más de 1000 semanas, dejando el IBL, cuantía y fecha de disfrute a criterio de la entidad.

### **2.2. RECURSOS DE APELACIÓN.**

#### **2.2.1 PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE.**

Interpuso recurso de apelación, bajo el entendido de que el Tribunal no acoja la tesis de la ineficacia del traslado, argumentando que se desconoce la *ratio decidendi* de las interpretaciones de la Corte Constitucional que han posibilitado la acumulación de tiempos públicos y privados, teniendo en cuenta

para ello la sentencia SU 769 de 2014 y SU 057 de 2018, por lo que, se desconoció la garantía al derecho a la seguridad social pues era totalmente factible la sumatoria de los tiempos laborados ante la Secretaria de Educación. De otro lado, destacó que hubo una indebida valoración probatoria toda vez que de los documentos arrimados al proceso, se podía concluir que el actor había cotizado más de 750 semanas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y por ende podía retornar al RPM en cualquier tiempo.

Respecto a la liquidación de la pensión de vejez, consideró el actor que dentro del expediente existen los suficientes elementos de prueba, como lo son las certificaciones de tiempo y la historia laboral de las demandadas, donde se evidencia los IBC y el número total de semanas para proceder con la liquidación de la mesada pensional.

Finalmente, frente a la pretensión de perjuicios, destacó que al momento en que se hizo la solicitud prestacional, se contaba con los requisitos para acceder al derecho, no obstante, la administradora al no garantizar la libre escogencia de régimen, conllevó a que al demandante no pueda disfrutar de la prestación desde el cumplimiento de los requisitos legales, siendo evidente el daño, el cual es la negación de la posibilidad de descansar después de la vida laboral.

## **2.2.2 PRESENTADO POR PORVENIR S.A.**

Interpuso recurso de apelación parcial, solicitando que se revoque la orden de devolución de los gastos de administración en razón a que son descuentos habilitados por la Ley y se utilizan para cubrir los conceptos que dicta el artículo 20 de la Ley 100 de 1993. El artículo 113 ibídem menciona los dineros que se deben trasladar en los eventos de cambio de régimen, estos son, los saldos de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos, pues los demás conceptos no están destinados a financiar la prestación por vejez, por lo que condenar a pagar estos valores genera un enriquecimiento sin causa. Aunado a lo anterior, los gastos de seguros previsionales fueron trasladados a un tercero quien se encargó de cubrir las contingencias establecidas. Frente a la indexación, resaltó que no es procedente por cuanto la cuenta de ahorro individual no se vio afectada por la inflación, ya que se obtuvieron unos rendimientos superiores a la rentabilidad mínima exigida a las AFP.

## **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.**

Solicitó se revoque de forma integral la sentencia de primera instancia, en razón a que, no se alegó, y menos probó los eventos previstos en los artículos 1508 y 1741 del Código Civil y 271 de la Ley 100

de 1993, por el contrario manifestó que se brindó una información oportuna y completa, garantizando el derecho de retracto, a la libre escogencia y el deber de información al demandante, adujo que el formulario de afiliación suscrito, es un documento público que se presume auténtico según los arts. 243 y 244 del CGP y el parágrafo del art. 54A del CPT, que además contiene la declaración de que trata el artículo 114 de la 100 de 1993, esto es que la selección fue libre, espontánea y sin presiones, sumado a que el referido documento no fue tachado, ni desconocido como lo disponen los artículos 246 y 272 respectivamente del Código General del Proceso. Resaltó que, no es viable jurídicamente imponerle cargas probatorias distintas a las previstas en las leyes existentes para el momento de la afiliación, pues hacerlo, claramente constituye una violación al debido proceso y a la confianza legítima, en tanto que actuó amparada por lo señalado en la Ley 100 de 1993, los decretos reglamentarios y en las disposiciones del órgano de vigilancia.

Adujo que, al tenor del principio de la congruencia de la sentencia – artículo 281 del C.G.P-, al no haberse discutido y menos probado la mala fe de Porvenir S.A. en la celebración del acto jurídico de afiliación, no puede condenársele a “restituir a favor de la afiliada y por ende de un tercero como es Colpensiones”, los rendimientos financieros que logró gracias a la gestión en la administración de los aportes en el RAIS, en igual medida no debe ordenarse la devolución de las primas de seguros por cuanto la afiliada siempre estuvo protegido por las contingencias que ellas amparan.

De forma subsidiaria, en caso de confirmar la sentencia, solicitó se autorice a dicha AFP a descontar de tal concepto las restituciones mutuas a que haya lugar, pues la AFP realizó una gestión a favor del actor, la cual generó los referidos rendimientos, aunado a lo anterior, indicó que: el valor a trasladar correspondería a los intereses que la persona hubiese obtenido en el RPM, esto es, el monto de los aportes + rentabilidad RISS (Colpensiones), por cuanto de acuerdo con el precedente judicial, la ineficacia implica retrotraer las cosas a su estado anterior como si nunca hubiese existido y, en aplicación del principio de inescindibilidad de las normas, la condena debería guardar consonancia con este principio.

Frente a la indexación de las sumas a retornar, consideró que conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C- 00161 de 2010 y por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 9316 de 2016, teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones que deben cumplir las AFPS, está la de garantizar la rentabilidad mínima de las cuentas de ahorro individual de cada uno de sus afiliados, es incompatible y excluyente ordenar la indexación, pues los recursos de la cuenta de ahorro individual de la parte demandante no se han visto afectados por la inflación, por el contrario, han generado rendimientos muy superiores a los que garantiza el RPM, por lo que ordenar a Porvenir S.A. a indexar cualquier suma de dinero, significa imponer una doble sanción, por cuanto, los rendimientos

financieros obtenidos, supera la posible pérdida del poder adquisitivo de los dineros de la afiliada representados en los aportes pensionales.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.**

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, el problema jurídico a resolver estribaría en determinar qué haberes le corresponde retornar a PORVENIR S.A., así como también si es procedente la liquidación de la pensión de vejez y la declaratoria de los perjuicios pretendidos por la parte demandante.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Por ello inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia.

### **4. CONSIDERACIONES.**

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de*

*régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado**.* (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».



La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

<b>Etapas acumulativas</b>	<b>Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información</b>	<b>Contenido mínimo y alcance del deber de información</b>
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época de la afiliación al RAIS, concretamente el 08 de febrero de 1999, fecha en la cual suscribió el formulario de afiliación a Colpatria hoy Porvenir S.A. (fl 80 del archivo 09 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características del RAIS, y las ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente el señor ORLANDO JARAMILLO VELASQUEZ, en el aludido interrogatorio expuso que su nivel de estudios es profesional en idiomas y que se desempeña laboralmente como docente en la universidad Luis Amigó. Respecto al traslado a Colpatria hoy Porvenir S.A. adujo que nunca fue consultado para efectuar dicha afiliación, y que se dio en razón a una vinculación laboral, resaltó que no tuvo una asesoría pensional y que el formulario de afiliación no fue suscrito por él.

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, trasladar a Colpensiones E.I.C.E todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones

del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(…) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(…) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo, toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente indexado por parte de Porvenir S.A., teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$ . Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en

las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida, Porvenir S.A. deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que se **CONFIRMARÁ** el fallo proferido por la a quo.

## PENSIÓN VEJEZ

Bastará con decir que al no surtir efectos el traslado, se entiende que es dable acceder al análisis de causación de la prestación por vejez de conformidad con el régimen de transición, para lo cual es dable traer a colación el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual a su tenor expone:

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014\*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley...”

De este modo, con el fin de precisar el cálculo temporal necesario para acceder al beneficio antes aludido, es pertinente traer a colación el artículo 151 ibídem, el cual determina desde que data entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, según la calidad de vinculación de los trabajadores, así:

“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.

PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.”

En este orden de ideas, con base en la Historia Laboral de Porvenir S.A. (fl. 97 del archivo 09 del expediente digital) antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante presentó su última afiliación en calidad de servidor público al servicio de la Secretaria de Educación de Antioquia,

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

por lo que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se debe contabilizar a 30 de junio de 1995, y dado que el señor ORLANDO JARAMILLO VELASQUEZ nació el 19 de abril de 1953, conforme se aprecia en la cédula de ciudadanía aportada (fl. 35 archivo 01 del expediente digital), a la data respectiva contaba con más de 40 años de edad, cumpliendo así el primer requisito para ser beneficiario del régimen de transición.

Cabe destacar que, aunque NO obra en el plenario el Registro Civil de Nacimiento, los datos plasmados en la cedula de ciudadanía del demandante son coincidentes con el que aprecia en la restante documentación, incluso incorporada por Porvenir S.A., entre ellas, la Historia Laboral (fl 91 a 105, archivo 09 del expediente digital), aunado a que Colpensiones E.I.C.E, mediante Concepto 4273229 de 2013<sup>2</sup> reconoció que la cédula era un documento idóneo para acreditar la edad al momento de reclamar este tipo de prestaciones económicas. En similar sentido lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia mediante sentencias SL5653-2018, SL15996-2014 y SL 15788-2017.

En segundo lugar, conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición se limitó en sus efectos hasta el 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que acrediten 750 semanas de cotización, o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del mismo, esto es el 25 de julio de 2005, para quienes no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre del año 2014, en este orden de ideas, se tiene que el demandante acreditó 1.412,42 semanas de cotización al 25 de julio de 2005, por lo que la fecha de **causación** correspondió al momento en que el accionante arribó a la edad pensional, esto es el 19 de abril de 2013, momento para el cual ya acreditaba el requisito de semanas exigido por el Decreto 758 de 1990.

De otro lado, en cuanto al **DISFRUTE**, se ha considerado que éste se da cuando una vez reunidos los requisitos, el afiliado solicita a la entidad administradora de pensiones el reconocimiento de la misma y se ha dado el retiro o desafiliación del sistema, pues para la liquidación de la prestación se debe tener en cuenta hasta la última semana cotizada, ya que mal se haría en reconocer un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

---

<sup>2</sup> 4. Conclusiones

- i) El registro civil fue estatuido por la Ley 92 de 1938 como único documento válido para acreditar el estado civil a partir de 15 de junio de 1938 y con anterioridad a ésta fecha, con la respectiva partida de bautismo.
- ii) La cédula de ciudadanía es el único documento válido, confiable e idóneo de identificación de las personas mayores de edad, de conformidad con lo regulado por la Ley 39 de 1961 y el Decreto 2241 de 1986 o Código Electoral.
- iii) En materia pensional, salvo lo estipulado en la Ley 962 de 2005 (de forma potestativa) y el Decreto 1889 de 1994 (para las pensiones de sobrevivientes únicamente), no existe ninguna otra normatividad que faculte a las entidades públicas o privadas para exigir el registro civil de nacimiento para adelantar el trámite de solicitudes pensionales.
- iv) Como quiera que con el registro civil de nacimiento se verifica, entre otros, la fecha de nacimiento y dicha data viene incluida en la cédula de ciudadanía, con el fin de reconocer las prestaciones económicas en las que se exija acreditar una edad determinada, éste documento será el idóneo para tal fin, pudiendo prescindirse válidamente del registro civil de nacimiento o de la partida de bautismo.
- v) Deberá seguirse exigiendo registro civil o partida para el reconocimiento de aquéllas prestaciones en las que necesariamente deba demostrarse el parentesco, tales como (...)
- vi) La cédula de ciudadanía es un documento expedido por autoridad pública competente que se reputa auténtica conforme lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

Así las cosas, basta con verificar la desafiliación o retiro del sistema, hecho que no sólo se prueba con el reporte expreso de la novedad de retiro, sino que también en algunos casos donde el afiliado deja de cotizar pero omite reportar formalmente su retiro, el hecho del que inequívocamente se infiere la voluntad de desafiliarse es la presentación de la reclamación tendiente al reconocimiento de la pensión, lo que constituye una manifestación indiscutible de la voluntad de cesar el pago de sus cotizaciones para empezar a disfrutar de la pensión.

De ahí que tal prestación esta llamada a disfrutarse a partir del día siguiente a la última cotización efectuada al sistema, hecho del que no existe certeza en el plenario, toda vez que la Historia Laboral obrante de folios 91 a 105 del archivo 09 del expediente digital, si bien refleja una última cotización para el ciclo de marzo de 2022, ello lo es porque fue impresa en data cercana a tal fecha (fecha de generación 01/08/2022), aunado a que, conforme a lo indicado en el interrogatorio de parte, el accionante resaltó que estaba laborando al servicio de la universidad Luis Amigó, diligencia que se realizó con posterioridad a la fecha de generación de la historia laboral más actual que reposa en el plenario.

Así las cosas, como NO existe certeza del último aporte del accionante al sistema, se mantendrá la condena respecto al reconocimiento de la pensión de vejez, cuya liquidación le corresponde a la administradora del régimen de prima media en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, **DISFRUTE** que se sometió a la verificación por parte de Colpensiones E.I.C.E del reporte de la novedad de retiro o cesación de cotizaciones, hecho del que no existe constancia en el expediente, no sólo, se insiste, por la lejanía de la data en que fue expedido el historial mencionado, sino además por la ausencia de soportes probatorios que otorguen certeza del retiro mencionado, por lo que se **MODIFICARÁ** la decisión de primera instancia en este punto, bajo el entendido en que la fecha de disfrute, será determinada por Colpensiones E.I.C.E al momento de verificar la novedad de retiro o la cesación efectiva de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones por la falta de certeza del retiro efectivo del accionante, mas no por falta de reclamación administrativa, pues las pretensiones que hoy se estudian, son coincidentes con las que el actor solicitó ante Colpensiones como se avizora a folio 85 del archivo 01 del expediente digital.

## **INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.**

Ahora bien, respecto a la solicitud de la parte actora de que se condene al reconocimiento y pago de perjuicios correspondientes al lucro cesante, esbozado como el valor del retroactivo pensional causado desde la reclamación de la pensión de vejez realizada el 4 de mayo de 2015, estima la Sala que dentro del plenario no obra prueba siquiera sumaria que acredite el daño que tuvo que soportar



el demandante con ocasión a su afiliación al RAIS, pues ni de las pruebas documentales, ni del interrogatorio de parte surtido, se puede concluir que el señor JARAMILLO VELASQUEZ haya soportado circunstancias con ocasión al actuar del fondo privado, razón por la cual, no es dable para la Sala, declarar la procedencia de preceptos condenatorios cuando no fueron probados en el proceso, pues si bien la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 373 de 2021 confirma la posibilidad de reclamar perjuicios dentro del proceso, es imprescindible que aquellos se encuentren plenamente acreditados y no estén prescritos. En el mismo sentir lo ha considerado el órgano de cierre en diferentes pronunciamientos, como por ejemplo en sentencia SL4205 de 2022, en la cual se adujo:

“En la reclamación de perjuicios morales es necesario acreditar su existencia, no es procedente su presunción o deducción a partir de conjeturas o suposiciones.

(...)

lo cierto es que en el sub lite aquellos no están demostrados, pues del dicho del accionante solo se deduce que tal acto le generó incertidumbre sobre su futuro pensional. Tampoco se infiere nada diferente del testimonio que Laura Victoria Pimiento Parra absolvió, pues al cuestionársele si podía dar fe de algún perjuicio ocurrido al actor con ocasión del traslado pensional, contestó que no, que este simplemente le manifestó «que estaba preocupado» porque no tenía resuelta su situación pensional.”

Así las cosas, se avizora que en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información al actor al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce la existencia de un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues, no es posible relevar al actor de la actividad probatoria que en tal sentido debió desplegar.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de la entidad, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, sino por el contrario, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial ha radicado en cabeza suya, tal y como aconteció en el caso de autos, donde el fondo no demostró la calidad de la asesoría que en su momento brindó al actor. Así las cosas, si se desconocen los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que se alega, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que el demandante decidió trasladarse de régimen, asesoría cuyo contenido integral se desconoce, dado que tal y como se mencionó, no es un constreñimiento lo que ocasiono el traslado de régimen, sino en el desconocimiento de la ley.

Bajo este panorama, resulta patente que el demandante no ha logrado satisfacer la carga de la prueba que le asiste en la demostración del perjuicio que alega, pues la ausencia de un vínculo directo y demostrable entre la acción de la AFP demandada, y el daño, constituye un elemento sustancial para desatar las consecuencias perseguidas en el recurso de alzada, por lo que, teniendo en cuenta los argumentos que anteceden, la ausencia de dicho puente causal debilita la base misma de la pretensión

y por ende, socava la fundamentación de la reclamación, dejando a cuestras la tesis sostenida por la parte actora, siendo estas razones suficientes para que esta Magistratura desestime lo esbozado en el recurso de alzada interpuesto por el accionante.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **modificándola** en el aspecto antes aludido.

Dado que no salieron avante los recursos de alzada, se condenará en costas en esta instancia a ambas partes, en primer término, a Porvenir S.A., se fija como agencias en derecho la suma de 1.160.000 a favor del demandante. En segundo término, a la parte demandante, se fija como agencias en derecho la suma de \$200.000, correspondiéndole un 50% a cada entidad demandada.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### DECIDE:

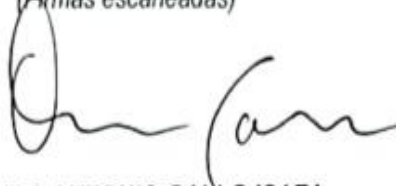
**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **ORLANDO JARAMILLO VELASQUEZ** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 4.464.850, en contra de **PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

**SEGUNDO: MODIFICAR** el numeral tercero de la providencia, bajo el entendido que se **ordena** a COLPENSIONES E.I.C.E al reconocimiento y pago de la prestación económica de vejez, a favor del señor **ORLANDO JARAMILLO VELASQUEZ**, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, de acuerdo con los parámetros indicados en la parte motiva de la providencia. El disfrute de esta prestación económica, estará condicionado a la verificación por parte de COLPENSIONES E.I.C.E del reporte de la novedad de retiro o cesación de cotizaciones, entidad que también deberá actualizar la historia laboral, teniendo en cuenta todos los tiempos cotizados y con base en esto, liquidar el IBL y consecuencial monto de la mesada pensional que le corresponde al demandante.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.00 a favor del demandante. De igual forma se condena en costas a la parte demandante, se fija como agencias en derecho la suma de \$200.000, correspondiéndole un 50% a cada entidad demandada.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	<b>ORLANDO JARAMILLO VELASQUEZ.</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES E.I.C.E y PORVENIR S.A.</b>
Radicado No.:	05001-31-05- 001-2021-00431-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	<b>CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA</b>
Fecha de la sentencia:	<b>11/12/2023.</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 12/12/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario